

2026

ACTUALIZACIÓN LEGAL

RUGE: 16 años de estabilidad para nuevos proyectos en Colombia

Proyecto de Ley 477 de 2026 – Ley de Rescate Económico

RUGE: 16 años de estabilidad para nuevos proyectos en Colombia

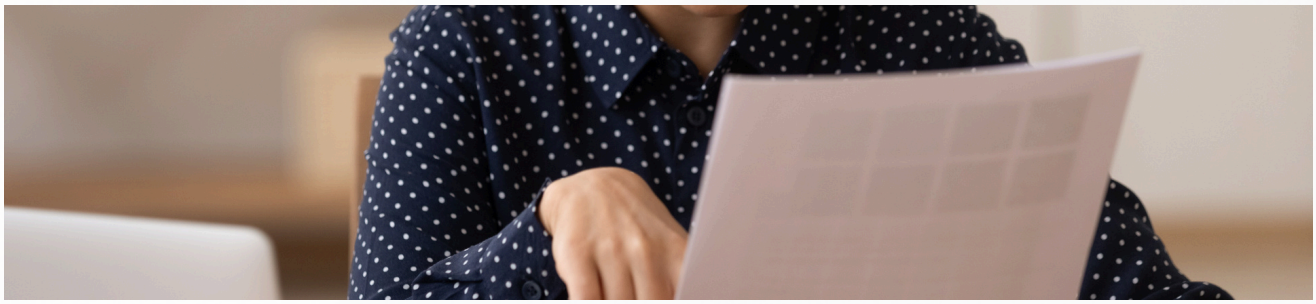
El nuevo Gobierno de Colombia ha hecho de la atracción de inversión productiva un pilar central de su agenda económica, y el Proyecto de Ley 477 de 2026 es uno de los primeros pasos concretos en esa dirección. Entre sus propuestas, el proyecto crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que otorgaría a las grandes inversiones productivas nuevas una tarifa del impuesto de renta más baja y fija, depreciación acelerada, menor retención sobre dividendos y protección frente a cambios normativos adversos durante 16 años. En este Boletín resumimos cómo funcionaría el régimen, quiénes califican, qué exige a cambio y las fechas clave que se deben tener en cuenta, de conformidad con lo previsto en el Proyecto de Ley 477 de 2026.

Importante:

Tenga en cuenta que se trata aún de un proyecto de ley y no de una ley vigente. El Congreso puede modificarlo sustancialmente o no aprobarlo, y el alcance de la estabilidad otorgada, así como los mecanismos con que contarán los inversionistas para hacerla exigible, dependerán del texto que finalmente se apruebe. Recomendamos hacer un seguimiento cercano a su trámite y consultarnos antes de tomar decisiones definitivas de inversión.

1) ¿Qué es el RUGE?

El Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE) ofrecería a grandes inversiones productivas nuevas, es decir, proyectos que adquieran, construyan o instalen en Colombia activos fijos nuevos (o sin uso previo en el país) que aumenten la capacidad productiva y cuyo monto sea igual o superior al mínimo fijado para cada sector (ver numeral 3), un paquete de condiciones que se mantendría durante 16 años frente a cambios normativos posteriores, salvo que una nueva ley disponga expresamente su aplicación a los proyectos adheridos al RUGE y establezca un régimen de transición. No requiere firmar un contrato con el Estado y no distingue entre inversión nacional y extranjera.



2) ¿Qué beneficios ofrece?

Una tarifa de renta más baja y fija:
La sociedad del proyecto pagaría una tarifa del 20% si su certificado se registra, según se explica en el numeral 5 de este Boletín, en 2027 o 2028, o del 26% si se registra desde 2029, frente al 31% general previsto en el proyecto de ley para que aplique desde 2028. La tarifa se mantiene igual durante los 16 años, sin sobretasas ni puntos adicionales, y no se le podrán aplicar nuevos impuestos nacionales sobre sus utilidades.

Alivio en el impuesto al patrimonio:
La sociedad del proyecto no pagaría impuesto al patrimonio ni ningún otro tributo nacional sobre la riqueza. Sus accionistas sí lo pagan sobre el valor de sus acciones, pero con las reglas vigentes al registrar el certificado.

Libertad cambiaria y aduanas estables:
Se mantiene el derecho a repatriar el capital y girar utilidades al exterior, y los trámites aduaneros no podrán volverse más exigentes para el proyecto. Además, el Gobierno podría reducir temporalmente los aranceles a maquinaria, equipos, partes y repuestos sin producción nacional destinados al proyecto.

Recuperación más rápida de la inversión:
La maquinaria, los equipos, las redes y los equipos de cómputo y telecomunicaciones podrán deducirse hasta en un 50% por año, y las edificaciones hasta en un 10%. Para el cálculo del impuesto mínimo del 15%, no se tendrá en cuenta la diferencia que genera esta depreciación acelerada. Si los activos se venden antes de tiempo, la deducción adicional se devuelve como ingreso.

Dividendos con menor retención:
Si el accionista es no residente, pagaría un impuesto único del 8% sobre los dividendos del proyecto (hoy es del 20%). Si el accionista es una sociedad nacional, la retención se reduciría del 10% al 8% y sería trasladable hasta el beneficiario final (persona natural o inversionista extranjero), sin nuevas retenciones en el camino. Los dividendos que reciban personas naturales residentes se rigen por las reglas generales.

Una protección real frente a cambios futuros:
Las leyes posteriores que modifiquen estos temas no se aplicarían al proyecto, salvo que lo digan expresamente y establezcan un régimen de transición. Si el Estado reemplaza un tributo por otro de igual o menor costo, no se considera un cambio adverso.

3) ¿A quién le aplica?

A proyectos de inversión nueva en infraestructura, energía, minería, industria, economía digital, agroindustria, turismo y servicios, que igualen o superen un monto mínimo según el sector:

Sector	Actividades incluidas	Inversión mínima	Aprox. en pesos (UVT 2026) *	Plazo de ejecución
Infraestructura, energía y recursos naturales	Minería y canteras (carbón, petróleo y gas, minerales); refinación de petróleo; electricidad y gas; agua, alcantarillado y gestión de residuos; obras de ingeniería civil; transporte terrestre, por tubería, acuático y aéreo, y almacenamiento	8.140.000 UVT	COP 426.324 millones	8 años
Industria y economía digital	Industria manufacturera (salvo la incluida en los otros sectores); telecomunicaciones; procesamiento de datos y hosting	5.530.000 UVT	COP 289.628 millones	6 años
Agroindustria, turismo, servicios y demás	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; alimentos y bebidas; construcción de edificaciones; mensajería; hoteles y restaurantes; edición, cine, TV, radio, software y servicios de información; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios administrativos; educación; salud; entretenimiento; otros servicios y demás actividades no incluidas en los sectores 1 y 2	2.580.000 UVT	COP 135.125 millones	5 años

** Calculado con la UVT de 2026 de COP 52.374 (Resolución DIAN 000238 del 15 de diciembre de 2025). El umbral se mide con la UVT vigente en la fecha de la solicitud, por lo que la cifra en pesos aumentará cada año.*

Quién no califica:

Proyectos de comercio, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, administración pública y defensa, actividades de los hogares como empleadores y de organizaciones extraterritoriales.

4) ¿Cómo calificar?

Contar con un vehículo exclusivo para el proyecto:

El proyecto debe ejecutarse por una sociedad colombiana o una sucursal de sociedad extranjera cuyo objeto exclusivo sea ese proyecto y que no haya obtenido ingresos operacionales a la fecha de la solicitud. Las sociedades o sucursales existentes que desarrollan otras actividades no pueden ser el vehículo; sus socios o controlantes sí pueden invertir creando uno nuevo.

Que sea inversión nueva:
No cuentan la compra de acciones, activos o establecimientos existentes, las reorganizaciones ni el traslado de activos entre vinculados: una operación de M&A, por sí sola, no accede al régimen. Para alcanzar el monto mínimo solo cuentan las inversiones en activos fijos nuevos (o sin uso previo en Colombia) que aumenten la capacidad productiva.

Pueden incluirse las inversiones de ese tipo hechas hasta 12 meses antes de presentar la solicitud (ver numeral 5), aunque no generan beneficios por períodos anteriores al registro del certificado.

Los anticipos a proveedores de equipos y a contratistas de obra también cuentan, pero solo hasta el 30% de la inversión comprometida y siempre que estén respaldados por un contrato firme y una garantía; el exceso se computa cuando se entreguen los bienes o se ejecuten las obras. Los terrenos y el capital de trabajo no suman al umbral.



Operaciones intragrupo a valor de mercado:
Las operaciones de la sociedad del proyecto con sus vinculadas se valoran a valor comercial y, cuando aplique, con precios de transferencia.

Proyectos APP:
Tienen reglas propias: los beneficios deben reflejarse en el contrato con el Estado, mediante la reducción de aportes públicos, vigencias futuras o compensaciones, y el contratista no puede reclamar compensaciones ni el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por cambios en las normas estabilizadas.

Sin acumular incentivos:
Un mismo proyecto no puede estar a la vez en el RUGE y en una zona franca, ZOMAC o ZESE, ni usar las rentas exentas del artículo 235-2 del Estatuto Tributario o los beneficios del Decreto Legislativo 1413 de 2026. Si su grupo ya opera en zona franca, puede entrar al RUGE solo con un vehículo nuevo y un proyecto fuera de la zona franca.



5) ¿Cómo se solicita y cuánto tarda?

Los beneficios no son automáticos: el proyecto debe obtener un certificado de adhesión inscrito en el Registro Público del RUGE, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ante el cual se presenta la solicitud en línea. Los plazos son en días hábiles, salvo el plazo máximo:

Etapa	Plazo	Qué ocurre
Revisión técnica	15 días	Un equipo del Gobierno revisa la solicitud y prepara una recomendación.
Decisión	15 días desde la recomendación	Un comité de ministerios aprueba o niega. Solo puede negar si no se cumplen los requisitos.
Aclaraciones	Una sola vez; 10 días para responder	Si el inversionista no responde a tiempo, la solicitud se entiende desistida y se archiva, pero puede volver a presentarse hasta el 31 de diciembre de 2029 (2031 para APP).
Plazo máximo	3 meses desde la solicitud	Pedir aclaraciones no detiene el reloj.
Si el Estado no responde	Al vencer los 3 meses	La solicitud se entiende aprobada. El inversionista la formaliza en escritura pública; si el Ministerio no la registra en 5 días, la escritura sirve como certificado.
Revisión posterior	3 meses	El Estado puede verificar una aprobación por silencio y, si hay fallas corregibles, dar 3 meses para subsanar. Si no se pronuncia, queda en firme.

Los 16 años de estabilidad y el plazo para invertir empiezan a correr desde el registro del certificado (en APP, desde la suscripción del acta de inicio de la etapa de construcción, sin superar el plazo del contrato). Las inversiones anteriores sirven para acreditar el mínimo, pero no generan beneficios por períodos previos.

6) ¿Qué exige el RUGE?

A cambio de la estabilidad, la sociedad del proyecto asume cinco compromisos que el Estado puede verificar:

Invertir a tiempo:

Debe ejecutar al menos el 40% de la inversión comprometida dentro de los dos años siguientes al registro del certificado y el 100% dentro del plazo de su sector (8, 6 o 5 años). En los proyectos APP, el 40% se mide a los tres años desde el inicio de la etapa de construcción, y la adhesión termina si el acta de inicio de esa etapa no se suscribe dentro de los tres años siguientes al registro del certificado.

Comprar en Colombia:
Durante todo el plazo de ejecución y los cinco primeros años de operación, al menos el 30% de las compras de bienes y servicios del proyecto debe hacerse a proveedores nacionales, sin contar bienes que no se producen en el país ni terrenos. Al menos una tercera parte de ese 30% debe ir a micro, pequeñas y medianas empresas o a proveedores del departamento donde está el proyecto.

Desarrollar proveedores locales:
Con la solicitud se presenta un plan que identifica a los proveedores potenciales de la región, sus brechas de calidad o escala y las acciones que el proyecto tomará para cerrarlas. Ese plan debe ejecutarse.



Otorgar una garantía:
Se exige una garantía de cumplimiento de al menos el 2% de la inversión comprometida (unos COP 2.700 millones para un proyecto de COP 135.125 millones), que puede ser una póliza de seguro, una garantía bancaria a primer requerimiento, una carta de crédito stand-by o un patrimonio autónomo. Se reduce proporcionalmente al acreditar el 40% y se libera al completar la inversión.

Pagar una prima anual e informar:
Durante los 16 años, la sociedad paga al Estado una prima anual del 0,1% del valor acumulado de lo invertido al 31 de diciembre del año anterior (unos COP 135 millones al año para ese mismo proyecto, una vez ejecutado), en los plazos del impuesto de renta. Además, cada año reporta en línea la inversión ejecutada, las compras a proveedores, el avance del plan de proveedores y el empleo formal directo.

El cumplimiento se verifica principalmente con información que el Estado ya tiene, como la factura electrónica, las declaraciones tributarias y de importación y la planilla de aportes, sin exigir documentos adicionales.



7) ¿ Qué pasa si se incumple?

Retraso:
Si a los dos años se ejecutó entre el 30% y el 40%, hay 12 meses más para ponerse al día, siempre que la demora no sea culpa del inversionista; por debajo del 30%, se pierde el régimen y se devuelven los beneficios.

Fraude:
La simulación, la información falsa o la desviación del proyecto implican devolver los beneficios con intereses, una multa del 10% al 50% de los beneficios y cinco años sin poder acceder al régimen para la sociedad del proyecto y sus inversionistas controlantes.

Proveedores:
Incumplir el plan de proveedores dos años seguidos reduce los beneficios en 10% por año.



Prima no pagada:
Si la prima anual no se paga a tiempo, el Estado exigirá su pago con intereses de mora dentro de los tres meses siguientes; si sigue sin pagarse, la adhesión termina hacia el futuro y se hace efectiva la garantía.

Condenas penales:
La condena del inversionista por lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos de corrupción, o la declaratoria de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, implican la terminación, la devolución de los beneficios y la inhabilidad para acceder al régimen.

Ejecución incompleta:
Si al final la inversión es igual o superior al mínimo del sector, pero menor a lo prometido, los beneficios se reducen a la mitad; si no se alcanza el mínimo, se pierde el régimen y se devuelven los beneficios con intereses.

8) ¿Qué pasa después de entrar?

El grupo puede vender el proyecto, reorganizarse o dar las acciones en garantía a sus bancos sin perder los beneficios, siempre que el proyecto continúe. No necesita permiso previo: basta avisar dentro de los 30 días siguientes. Eso sí, si la sociedad del proyecto se disuelve o liquida y queda debiendo beneficios por incumplimiento, los socios o controlantes responden solidariamente por esa deuda.

9) Fechas clave

Tres meses desde la promulgación: plazo del Gobierno para reglamentar el RUGE.
2027–2028: ventana para inscribir el certificado y asegurar la tarifa del 20%.
31 de diciembre de 2029: último día para solicitar el RUGE (2031 para APP).

¿Cómo puede ayudarle Posse Herrera Ruiz? Nuestro equipo puede ayudarle a evaluar si su proyecto califica para el RUGE, a monitorear el proceso de la ley ante el Congreso de la República, estructurar el vehículo de inversión, preparar la solicitud y acompañar el cumplimiento de sus compromisos.

Contáctanos:



Jaime Herrera
Socio - Derecho Corporativo y M&A
Correo: jaime.herrera@phrlegal.com



Juan Guillermo Ruiz
Socio - Impuestos, aduanas y comercio exterior
Correo: juanguillermo.ruiz@phrlegal.com



Juan Camilo De Bedout
Socio - Impuestos
Correo: juan.debedout@phrlegal.com



Jaime Enrique Gómez
Socio - Impuestos
Correo: jaime.gomez@phrlegal.com



María Paula Sánchez
Socia - Aduanas y Comercio Exterior
Correo: mariapaula.sanchez@phrlegal.com



Catalina Noreña
Socia - Derecho Corporativo y M&A
Correo: catalina.norena@phrlegal.com



Álvaro José Rodríguez
Socio - Energía y Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad corporativa
Correo: alvaro.rodriguez@phrlegal.com



Mariana Sánchez
Socia - Energía y Recursos Naturales
Correo: mariana.sanchez@phrlegal.com



Cristina Vásquez
Socia - Infraestructura y Derecho Público
Correo: cristina.vasquez@phrlegal.com



Pablo Fernández
Asociado - Impuestos
Correo: pablo.fernandez@phrlegal.com

POSSE
HERRERA
RUIZ

BOGOTÁ
Teléfono: +57 (601) 3257300
Cra. 7 No. 71-52, Torre A 5to Piso.
Código Postal 110231

MEDELLÍN
Teléfono: +57 (604) 4488435
Cra. 43A # 1 – 50 Torre 2
Oficina 864 8vo Piso, San Fernando Plaza

BARRANQUILLA
Teléfono: +57 (605) 3112140
Cra. 53 # 82 – 86
4to Piso.



2026

LEGAL UPDATE

RUGE: 16 Years of Stability for New Projects in Colombia

Bill 477 of 2026, "Economic Recovery Act"

RUGE: 16 Years of Stability for New Projects in Colombia

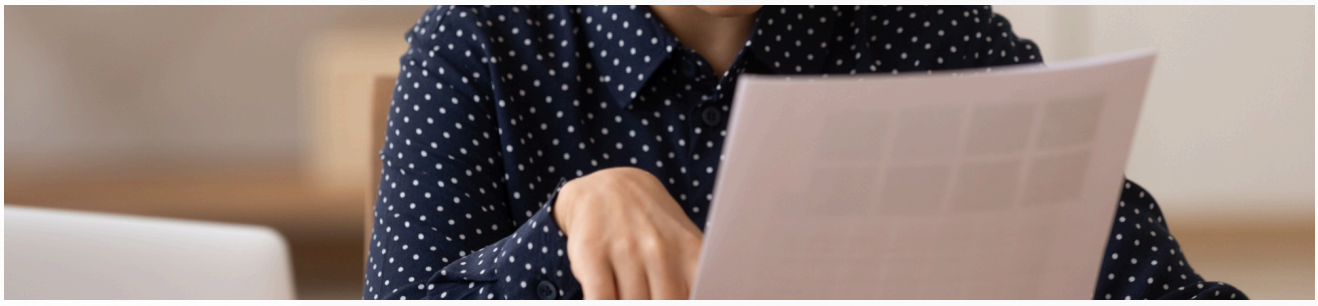
Colombia's new government has made attracting productive investment a central pillar of its economic agenda, and Bill 477 of 2026 is one of the first concrete steps in that direction. Among its proposals, the bill creates the Unified Regime for Generating Business Stability (RUGE), which would give large new investment projects a lower, fixed income tax rate, accelerated depreciation, reduced dividend withholding, and protection against adverse regulatory changes for 16 years. In this newsletter, we summarize how the regime would work, who qualifies, what it requires, and the key dates to keep in mind, in accordance with Bill 477 of 2026.

Important:

Please note that this is still a bill, not a law in force. Congress may amend it significantly or not approve it, and the scope of the stability granted, as well as the mechanisms available to investors to enforce it, will depend on the final text enacted. We recommend monitoring its progress closely and consulting with us before making final investment decisions.

1) What is RUGE?

The Unified Regime for Generating Business Stability (RUGE) would offer a package of conditions to large new productive investments, meaning projects that acquire, build, or install new fixed assets in Colombia (or assets not previously used in the country) that increase productive capacity and meet or exceed a minimum investment amount set for each sector (see section 3). These conditions would remain in effect for 16 years, regardless of subsequent regulatory changes, unless a new law expressly provides for its application to projects participating in the RUGE and establishes a transition regime. It does not require signing a contract with the government and does not distinguish between domestic and foreign investment.



2) What benefits does it offer?

A lower, fixed income tax rate:
The project company would pay a rate of 20% if its certificate is registered —as explained in section 5 of this newsletter—in 2027 or 2028, or 26% if registered starting in 2029, compared to the general rate of 31% that the bill proposes starting in 2028. The rate remains the same for 16 years, with no surcharges or additional points, and no new national taxes on its profits may be applied.

Wealth tax relief:
The project company would not pay wealth tax or any other national tax on wealth. Its shareholders would pay such taxes on the value of their shares, but under the rules in effect at the time the certificate is registered.

Exchange rate freedom and stable customs procedures:
The right to repatriate capital and transfer profits abroad is maintained, and customs procedures may not become more stringent for the project. Additionally, the government could temporarily reduce tariffs on machinery, equipment, parts, and spare parts not produced domestically that are intended for the project.

Faster return on investment:
Machinery, equipment, networks, and computer and telecommunications equipment may be depreciated at a rate of up to 50% per year, and buildings at a rate of up to 10%. For the calculation of the 15% minimum tax, the difference resulting from this accelerated depreciation will not be taken into account. If the assets are sold prematurely, the additional deduction is treated as income.

Dividends with Lower Withholding Tax:
If the shareholder is a non-resident, they would pay a flat tax of 8% on dividends paid by the project company (currently 20%). If the shareholder is a domestic corporation, the withholding tax would be reduced from 10% to 8% and would be pass-through to the ultimate beneficiary (an individual or foreign investor), with no further withholdings along the way. Dividends received by resident individuals are governed by the general rules.

Real protection against future changes:
Subsequent laws that modify these provisions would not apply to the project, unless they expressly state otherwise and establish a transition period. If the government replaces one tax with another of equal or lower cost, this is not considered an adverse change.

3) To whom does it apply?

To new investment projects in infrastructure, energy, mining, industry, the digital economy, agribusiness, tourism, and services that meet or exceed a minimum amount based on the sector:

Sector	Included Activities	Minimum Investment	Approx. in dollars*	Implementation Period
Infrastructure, Energy, and Natural Resources	Mining and quarrying (coal, oil and gas, minerals); oil refining; electricity and gas; water, sewer, and waste management; civil engineering works; land, pipeline, water, and air transportation; and storage	8,140,000 UVT	USD 134.6 million	8 years
Industry and the digital economy	Manufacturing (excluding that included in other sectors); telecommunications; data processing and hosting	5,530,000 UVT	USD 91.5 million	6 years
Agribusiness, tourism, services, and others	Agriculture, livestock, forestry, and fishing; food and beverages; building construction; courier services; hotels and restaurants; publishing, film, TV, radio, software, and information services; professional, scientific, and technical services; administrative services; education; health; entertainment; other services and other activities not included in sectors 1 and 2	2,580,000 UVT	USD 42.7 million	5 years

** UVT 2026: COP 52,374 (DIAN Resolution 000238 of 2025); TRM as of October 30, 2026: COP 3,166.91 per USD 1. The threshold is calculated using the UVT for the year of the application and varies with the exchange rate.*

Who does not qualify: Commercial projects, financial and insurance activities, real estate activities, public administration and defense, activities of households as employers, and activities of extraterritorial organizations.

4) How to Qualify?

Use a dedicated vehicle for the project:

The project must be carried out by a Colombian company or a branch of a foreign company whose sole purpose is the development of that specific project, and which has not generated operating income as of the application date. Existing companies or branches engaged in other activities cannot serve as the vehicle; however, their partners or controlling shareholders may invest through a new one.

It must be a new investment:

The purchase of existing shares, assets, or establishments; reorganizations; or the transfer of assets between related parties does not qualify; an M&A transaction, on its own, does not qualify for the program. Only investments in fixed assets that are new (or have not been previously used in Colombia) and that increase productive capacity. qualify These may include qualifying investments made up to 12 months before the application is filed (see section 5), although they will not generate benefits for periods before the certificate is registered.

Advance payments to equipment suppliers and construction contractors also count, but only up to 30% of the committed investment and only if backed by a firm contract and a guarantee; any excess counts once the goods are delivered or the works are completed. Land and working capital do not count toward the threshold.



Intragroup transactions at market value:

Transactions between the project company and its affiliates are valued at market value and, where applicable, using transfer pricing.

PPP:

They have their own rules—the benefits must be reflected in the contract with the government, through a reduction of public contributions, future appropriations, or compensation, and the contractor may not claim compensation or restoration of the contract's economic balance due to changes in the stabilized rules.

No Duplication of Incentives:

A single project may not simultaneously be part of the RUGE and a free trade zone, ZOMAC, or ZESE, nor may it utilize the tax-exempt income provided for in Article 235-2 of the Tax Code or the benefits of Legislative Decree 1413 of 2026. If your group already operates in a free trade zone, it may enter the RUGE only through a new vehicle and a project located outside the free trade zone.



5) How do you apply, and how long does it take?

The benefits are not automatic: the project must obtain a certificate of accession registered in the RUGE Public Registry, administered by the Ministry of Commerce, Industry, and Tourism, to which the application is submitted online. Deadlines are in business days, except for the maximum deadline:

Stage	Deadline	What Happens
Technical Review	15 days	A government team reviews the application and prepares a recommendation.
Decision	15 days from the recommendation	A committee of ministries approves or denies the application. It may only be denied if the requirements are not met.
Clarifications	One time only; 10 days to respond	If the investor does not respond on time, the application is deemed withdrawn and shelved, but it may be resubmitted until December 31, 2029 (2031 for PPPs).
Maximum time limit	3 months from the date of application	Requesting clarifications does not pause the clock.
If the government does not respond	Upon expiration of the 3-month period	The application is deemed approved. The investor formalizes it in a notarized deed; if the Ministry does not register within 5 days, the deed serves as a certificate.
Subsequent review	3 months	The government may verify a tacit approval and, if there are correctable deficiencies, grant 3 months to remedy them. If it does not issue a ruling, the approval becomes final.

The 16-year stability period and the investment term begin upon registration of the certificate (for PPPs, upon signing of the construction-phase start record, without exceeding the contract term). Prior investments count toward meeting the minimum requirement but do not generate benefits for previous periods.

6) What does the RUGE require in return?

In exchange for stability, the project company assumes five commitments that the government can verify:

Invest on time: It must execute at least 40% of the committed investment within two years of the certificate's registration and 100% within the timeframe specified for its sector (8, 6, or 5 years). For PPP projects, the 40% threshold is measured three years after the start of the construction phase, and accession terminates if the construction-phase start record is not signed within three years of the certificate's registration.

Purchase in Colombia:
Throughout the entire implementation period and the first five years of operation, at least 30% of the project's purchases of goods and services must be made from domestic suppliers, excluding goods not produced in the country and land. At least one-third of that 30% must go to micro, small, and medium-sized enterprises or to suppliers in the country's region (departamento) where the project is located.

Develop local suppliers:
The application must include a plan identifying potential suppliers in the region, their gaps in quality or scale, and the actions the project will take to address them. This plan must be implemented.



Provide a performance bond:
A performance bond of at least 2% of the committed investment (approximately USD 0.85 million for a USD 42.7 million project) is required; this may take the form of an insurance policy, a bank guarantee payable on first demand, a standby letter of credit, or a trust structure (patrimonio autónomo). The bond is reduced proportionally upon certification of 40% of the investment and is released upon completion of the investment.

Pay an annual premium and file reports:
Over the 16-year period, the company pays the government an annual premium of 0.1% of the cumulative value of investments as of December 31 of the previous year (approximately USD 42,700 per year for that same project, once implemented), in accordance with income tax deadlines. In addition, each year the company reports online on the investment made, purchases from suppliers, progress on the supplier plan, and direct formal employment.

Compliance is verified primarily using information already held by the government, such as electronic invoices, tax and import declarations, and the payroll tax return, without requiring additional documents.



7) What happens in case of noncompliance?

Delay:
If, after two years, between 30% and 40% has been executed, the investor has an additional 12 months to catch up, provided the delay is not the investor's fault; if the execution rate is below 30%, the regime is forfeited and the benefits must be returned.

Incomplete Implementation:
If, at the end of the period, the investment equals or exceeds the sector's minimum but falls short of the promised amount, the benefits are reduced by half; if the minimum is not met, the regime is forfeited and the benefits must be repaid with interest.

Suppliers:
Failing to comply with the supplier plan for two consecutive years reduces benefits by 10% per year.

Fraud: Fraud, false information, or deviation from the project requires the return of benefits with interest, a fine of 10% to 50% of the benefits, and a five-year ban on accessing the program for the project company and its controlling investors.



Criminal convictions:
A conviction of the investor for money laundering, terrorist financing, or corruption offenses, or an administrative liability finding against the legal entity, results in termination, return of the benefits, and disqualification from the program.

Unpaid premium:
If the annual premium is not paid on time, the government will require payment with late-payment interest within three months; if it remains unpaid, the accession is terminated going forward and the bond is enforced.

8) What happens after enrollment?

The group may sell the project, reorganize, or pledge its shares as collateral to its banks without losing the benefits, provided the project continues. No prior permission is required: simply provide notice within the following 30 days. However, if the project company is dissolved or liquidated and owes benefits due to noncompliance, the partners or controlling shareholders are jointly and severally liable for that debt.

9) Key Dates

Three months from enactment: the government's deadline for regulating the RUGE.
2027–2028: Window to register the certificate and secure the 20% rate.
December 31, 2029: Last day to apply for the RUGE (2031 for PPPs).

How Can Posse Herrera Ruiz Help You? Our team can help you assess whether your project qualifies for the RUGE, monitor the legislative process in the Congress of the Republic, structure the investment vehicle, prepare the application, and assist with fulfilling your commitments.

Contact us:



Jaime Herrera
Partner - Corporate Law and M&A
Email: jaime.herrera@phrlegal.com



Juan Guillermo Ruiz
Partner - Tax, Customs and International Trade
Email: juanguillermo.ruiz@phrlegal.com



Juan Camilo De Bedout
Partner - Tax
Email: juan.debedout@phrlegal.com



Jaime Enrique Gómez
Partner - Tax
Email: jaime.gomez@phrlegal.com



María Paula Sánchez
Partner - Customs and International Trade
Email: mariapaula.sanchez@phrlegal.com



Catalina Noreña
Partner - Corporate Law, M&A
Email: catalina.norena@phrlegal.com



Álvaro José Rodríguez
Partner - Energy & Natural Resources, Environmental Law and Corporate Sustainability
Email: alvaro.rodriguez@phrlegal.com



Mariana Sánchez
Partner - Energy & Natural Resources
Email: mariana.sanchez@phrlegal.com



Cristina Vásquez
Partner - Infrastructure and Public Law
Email: cristina.vasquez@phrlegal.com



Pablo Fernández
Associate - Tax
Email: pablo.fernandez@phrlegal.com

POSSE
HERRERA
RUIZ

BOGOTÁ
Phone: +57 (601) 3257300
7th Street, No. 71-52, Tower A, 5th Floor
Postal Code 110231

MEDELLÍN
Phone: +57 (604) 4488435
Cra. 43A No. 1–50, Tower 2, Office 864
8th Floor, San Fernando Plaza

BARRANQUILLA
Phone: +57 (605) 3112140
Cra. 53 No. 82–86
4th Floor